



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general  
19 de agosto de 2015  
Español  
Original: inglés  
Español, francés, inglés y ruso  
únicamente

### Comité de Derechos Humanos

#### Lista de cuestiones previa a la presentación del quinto informe periódico de Belarús\*

El Comité de Derechos Humanos estableció en su 97º período de sesiones (A/65/40 (Vol. I), párr. 40) un procedimiento facultativo consistente en la preparación y aprobación de una lista de cuestiones que se ha de transmitir al Estado parte interesado antes de que presente su informe periódico. Las respuestas a esta lista de cuestiones constituirán el informe que el Estado parte debe presentar en virtud del artículo 40 del Pacto.

#### Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto

1. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se hayan adoptado para dar cumplimiento a las últimas recomendaciones del Comité (CCPR/C/84/Add.4 y Add.7), incluidos los datos estadísticos pertinentes.
2. Asimismo, sírvanse informar sobre cualquier novedad de importancia en el marco legal e institucional de la promoción y protección de los derechos humanos, que haya tenido lugar desde la aprobación de las anteriores observaciones finales, incluyendo ejemplos de casos en que los tribunales nacionales han invocado las disposiciones del Pacto.

#### Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluida la relacionada con las recomendaciones anteriores del Comité

##### Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (arts. 2, 3 y 26)

3. Sírvanse indicar qué medidas ha adoptado o está adoptando el Estado parte para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo Facultativo y para colaborar con el Comité, en particular atendiendo a las peticiones de adopción de medidas provisionales formuladas por el Comité, especialmente en casos de pena de muerte, y dando cumplimiento a su dictamen. Indíquese asimismo qué procedimientos se han establecido para dar cumplimiento al dictamen del Comité en virtud del

\* Aprobada por el Comité en su 114º período de sesiones (29 de junio a 24 de julio de 2015).



Protocolo Facultativo, y facilítese información sobre las medidas que se hayan adoptado para asegurar el pleno cumplimiento de todos los dictámenes aprobados en relación con el Estado parte.

4. En vista de las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 20), sírvanse proporcionar información sobre los progresos en el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Principios de París) (resolución 48/134 de la Asamblea General, anexo).

**No discriminación y prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso (arts. 2, 3, 20 y 26)**

5. Se ruega indiquen si se han tomado o se están tomando disposiciones para aprobar una legislación general que aborde la discriminación, incluso en la esfera privada, prohíba la discriminación directa, indirecta y múltiple, contenga una lista exhaustiva de los motivos de discriminación, incluidos los basados en la orientación sexual y en la identidad de género, y prevea recursos efectivos en los procedimientos judiciales y administrativos.

6. Sírvanse aclarar si la incitación al odio está prohibida por la ley y si se han adoptado disposiciones para: a) prohibir las organizaciones y las actividades propagandísticas, de carácter organizado o no, que promuevan la discriminación racial y la incitación al odio, y b) reconocer la motivación racista como circunstancia agravante de todas las infracciones y delitos.

7. Facilítese información sobre las medidas que se hayan adoptado para combatir la discriminación contra los romaníes, así como su representación negativa y estereotipada en los medios de comunicación, y para asegurar el acceso de los romaníes a la educación, el empleo, la atención de la salud y la vivienda en pie de igualdad con las demás personas. Se ruega informen de las medidas que se hayan adoptado para poner fin a los controles policiales con sesgo racista de que son objeto los romaníes.

8. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se hayan adoptado para: a) combatir la discriminación de las personas con discapacidad y asegurar su acceso a una educación adecuada, al empleo y a la asistencia social, así como su accesibilidad en la práctica a lugares y medios de transporte públicos, y b) luchar contra la discriminación y la estigmatización de las personas que viven con el VIH/SIDA.

9. Se ruega formulen observaciones sobre las denuncias de discriminación, hostigamiento, discurso homófobo generalizado e incitación al odio, en los medios de comunicación e incluso por el propio Presidente, y de actos violentos dirigidos contra personas y activistas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales, y aporten información sobre las medidas que se hayan adoptado para proteger a las víctimas y combatir la impunidad prevaleciente de esos actos.

**Igualdad entre hombres y mujeres y violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica (arts. 2, 3, 7 y 26)**

10. Sírvanse facilitar información sobre las medidas que se hayan adoptado para: a) aumentar la representación de las mujeres en cargos de responsabilidad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como en el sector privado; b) acabar con los estereotipos en las funciones, las responsabilidades y la identidad de la mujer y del hombre en la familia y en la sociedad, y c) remediar la diferencia salarial persistente entre hombres y mujeres.

11. Indíquese qué medidas se han adoptado para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer, incluidas la violencia doméstica y la violación conyugal, entre otras cosas acerca de: a) la oferta de formación sobre las disposiciones jurídicas en la materia y la detección y gestión de este tipo de casos; b) las iniciativas para promover las denuncias de estos casos y garantizar que se investiguen de forma efectiva y que se concedan reparaciones adecuadas a las víctimas, y c) el establecimiento de suficientes centros de acogida y otros recursos y servicios de apoyo para las víctimas. Se ruega faciliten información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones relacionadas con la violencia doméstica de la Ley de Fundamentos de la Prevención de Delitos, de 4 de enero de 2014. Indíquese si se han adoptado o se están adoptando disposiciones para aprobar leyes específicas que tipifiquen como delito la violencia doméstica y la violación conyugal. Se ruega aporten información sobre el número de denuncias presentadas por víctimas de violencias domésticas y sexuales, las investigaciones realizadas, los tipos de condenas impuestas y las reparaciones concedidas a las víctimas.

**Derecho a la vida (arts. 6, 7 y 14)**

12. Sírvanse proporcionar información sobre el avance de las investigaciones de: a) las desapariciones forzadas que se produjeron en 1999 y 2000, en particular las de Viktor Hanchar, Anatol Krasovsky, Yury Zakharenko y Dimitry Zavadsky, y b) los casos de los periodistas Veranika Charkasava (asesinada el 20 de octubre de 2004), Vasil Hrodnikau (hallado muerto el 18 de octubre de 2005) y Aleh Biabenin (hallado muerto el 3 de septiembre de 2010). Se ruega faciliten también información sobre las disposiciones que se hayan adoptado para prevenir las muertes de personas en prisión preventiva, el número de casos de este tipo acaecidos desde 2010 (indicando la causa de la muerte) y las investigaciones realizadas sobre dichos incidentes —incluida la muerte de Ihar Ptichkin en agosto de 2013 en el centro de prisión preventiva núm. 1 de Minsk (SIZO)— y el enjuiciamiento de los culpables.

13. En referencia a las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 8), sírvanse informar de los progresos hacia la abolición de la pena de muerte. Hasta tanto no se produzca dicha abolición, indíquese qué medidas se han adoptado para: a) armonizar con el artículo 7 del Pacto la legislación pertinente que dispone que la familia de una persona condenada a muerte no deba ser informada con antelación de la fecha de la ejecución, que no sean entregados a la familia los restos mortales del preso ejecutado y que no se comunique el lugar de inhumación; b) velar por que las personas acusadas de delitos castigados con la pena de muerte gocen en la práctica de todas las garantías fundamentales para la realización de juicios imparciales, y c) garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los condenados a muerte a pedir el indulto o la conmutación de la pena. Asimismo, se ruega aclaren si la legislación en la materia contempla la posibilidad de interponer recursos de casación contra las sentencias, incluidas las condenas a muerte, dictadas por el Tribunal Supremo en primera instancia.

**Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 7)**

14. En relación con las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 9), sírvanse responder a las informaciones según las cuales:

a) Tanto en los centros de prisión preventiva como en los establecimientos penitenciarios las fuerzas del orden, los agentes del Comité de Seguridad del Estado (KGB) y el personal penitenciario infligen torturas y malos tratos a personas privadas de libertad, en particular activistas de la sociedad civil, entre otros fines para extraer

confesiones y presentarlas posteriormente como prueba ante los tribunales, y que estos actos se cometan con plena impunidad;

b) Las personas que denuncian actos de tortura corren el riesgo de sufrir represalias, como la reclusión en régimen de aislamiento u otras formas crueles de malos tratos físicos y psicológicos;

c) No se ha establecido ningún mecanismo efectivo y plenamente independiente para recibir quejas e investigar las denuncias de tortura y malos tratos, y los presuntos autores no son suspendidos en sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación;

d) La documentación de las lesiones sufridas por los presos es problemática, porque los servicios médicos están integrados en la estructura del sistema penitenciario.

15. Indíquense las medidas que se hayan adoptado para: a) definir y tipificar la tortura como delito independiente en el Código Penal en plena conformidad con el artículo 7 del Pacto, y b) investigar sin demora y de manera imparcial las denuncias de tortura y malos tratos, incluidas las relacionadas con los candidatos y militantes políticos detenidos en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006 y durante las manifestaciones organizadas por la oposición el día de las elecciones en diciembre de 2010, y después de ellas, como la tortura y los malos tratos de que fueron presuntamente víctimas Aliaksandr Kazulin, candidato a la presidencia en 2006, y Andrei Sannikau y Ales Mikhalevich, candidatos a la presidencia en 2010. Se ruega proporcionen información sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos presentadas, las investigaciones realizadas y sus resultados, incluidas las sentencias dictadas contra los autores y las reparaciones concedidas a las víctimas.

#### **Eliminación de la esclavitud y la servidumbre (art. 8)**

16. Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso. Sírvanse informar también de las disposiciones que se hayan adoptado para: a) establecer un mecanismo nacional oficial de detección y remisión de las víctimas, mejorar la detección de las víctimas de la trata de personas e impartir formación especializada a todas las personas que intervengan en el proceso de detección; b) investigar y enjuiciar de forma efectiva los casos de trata, incluidos los relacionados con el trabajo forzoso y la prostitución forzada, y c) destinar más recursos a los servicios de asistencia y protección de las víctimas. Sírvanse comentar el escaso número de causas incoadas en virtud del artículo 181 del Código Penal y aclarar si el acto de compraventa de una persona sigue siendo un requisito para calificar un acto de trata. Se ruega faciliten datos estadísticos sobre el número de casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, las investigaciones realizadas, las causas incoadas y el número real de condenas penales impuestas en virtud del artículo 181 del Código Penal.

#### **Libertad y seguridad personales y trato humano de las personas privadas de libertad (arts. 9 y 10)**

17. En vista de las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 10), sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para garantizar que: a) la prisión preventiva solo pueda ser ordenada por un juez y no dependa únicamente de la gravedad del presunto delito, y b) la revisión judicial de la prisión preventiva se ajuste a las normas establecidas en el artículo 9 del Pacto. Se agradecerá faciliten información sobre las medidas no privativas de libertad distintas de la prisión preventiva, y su aplicación en la práctica.

18. Sírvanse explicar la compatibilidad con el artículo 9 del Pacto de las prácticas de la detención preventiva, la detención administrativa y la reclusión arbitraria de particulares en vísperas de actos políticos o sociales importantes. Se ruega comenten la información según la cual las autoridades aplican en ocasiones tratamientos psiquiátricos forzados a defensores de los derechos humanos y, a este respecto, proporcionen información sobre las siguientes denuncias: a) la reclusión en régimen de incomunicación y el tratamiento psiquiátrico forzado de un médico en 2013 en relación con su investigación sobre la corrupción en el servicio sanitario de Vítebsk, y b) el tratamiento psiquiátrico forzado de Andrey Kasheuski, militante de la oposición y repartidor de periódicos, por llevar un lazo de las protestas del Euromaidán.

19. Sírvanse comentar las informaciones según las cuales: a) los expresos políticos indultados siguen sometidos a un régimen de vigilancia preventiva que restringe sus desplazamientos y les exige presentarse periódicamente ante la policía, y b) no se han restablecido plenamente los derechos civiles y políticos de esas personas, ya que se les prohíbe presentar su candidatura para cargos públicos u ocuparlos, y están obligadas a observar las restricciones que les han sido impuestas, como el toque de queda y la prohibición de participar en manifestaciones, y a informar a las autoridades de cualquier cambio de domicilio.

20. En referencia a las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 11), sírvanse facilitar información sobre las medidas que se hayan adoptado para prevenir y reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones en los centros de detención. Se ruega respondan a las denuncias sobre la mala calidad de la comida, la insuficiencia de artículos sanitarios e higiénicos de primera necesidad, el trato médico inadecuado, la ausencia de ropa de cama apropiada y la práctica de dormir por turnos, así como el elevado riesgo de contraer enfermedades crónicas al que están expuestos los presos en las cárceles de Minsk y Baránavichi y en las celdas de castigo de las colonias de Navapólsk e Ivatsévichi, debido al frío y a la humedad en las celdas. Aclárese si las personas privadas de libertad disponen de un mecanismo de denuncia independiente y eficaz, entre otras cosas para los actos de violencia sexual en los lugares de reclusión. Se ruega respondan asimismo a las preocupaciones relacionadas con la independencia y la eficacia de las comisiones de supervisión pública, en particular en lo relativo a la tramitación de las quejas de los reclusos.

21. Sírvanse comentar los informes según los cuales los presos políticos que están cumpliendo condena son objeto de sanciones administrativas por presuntas violaciones de las normas del centro penitenciario, que en ocasiones entrañan la prolongación de la pena, y se les deniega el derecho a recibir visitas de familiares o paquetes. Sírvanse también comunicar las medidas que se han adoptado para que las sanciones disciplinarias no se impongan de forma arbitraria en las cárceles, y aclarar si existen mecanismos de supervisión y procedimientos de apelación para supervisar esas sanciones.

#### **Derecho a un juicio imparcial e independencia del poder judicial (art. 14)**

22. En referencia a las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 13), sírvanse informar de las medidas que se hayan adoptado para asegurar en la práctica la plena independencia e imparcialidad de los jueces respecto del poder ejecutivo, así como su seguridad en el cargo. Facilítese información sobre los procedimientos y criterios para la selección, el nombramiento, el ascenso, la sanción disciplinaria, la suspensión y la destitución de los jueces, así como sobre la función que desempeña el poder ejecutivo en este proceso. Se ruega informen asimismo de las disposiciones adoptadas para poner remedio a: a) las denuncias de decisiones judiciales basadas en motivaciones políticas y de parcialidad de los fiscales; b) la tendenciosidad de la acusación en las causas penales, reconocida

por el Tribunal Supremo en sus revisiones, y el escasísimo número de sentencias absolutorias pronunciadas, y c) el incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional.

23. Sírvanse comentar las informaciones según las cuales las autoridades no han respetado las garantías procesales en los juicios de los candidatos de la oposición y los activistas de los derechos humanos tras las elecciones presidenciales de 2006 y 2010, incluida la restricción del derecho a una audiencia pública y a asistencia letrada y la violación de la presunción de inocencia y del principio de igualdad de medios.

24. Respecto de las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 14), sírvanse responder a las preocupaciones expresadas acerca del menoscabo de la independencia de la abogacía, entre otras cosas debido a la obligación de pertenecer a un colegio de abogados sometido al control del Estado. Se ruega formulen observaciones sobre las denuncias de hostigamiento e intimidación sufridos por abogados, la injerencia general en su labor, incluido el incumplimiento del principio de confidencialidad entre el abogado y su cliente, y la inhabilitación arbitraria, en particular de los abogados que expresan públicamente su preocupación por la tortura y de los que se ocupan de casos delicados por su naturaleza política, así como los que representan a candidatos de la oposición en asuntos relacionados con las elecciones presidenciales de diciembre de 2010.

#### **Libertad de circulación (art. 12)**

25. En referencia a las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 12), sírvanse aclarar si se ha abolido el sistema de la “propiska” (registro de la dirección particular) e indicar qué restricciones impone la legislación a la libertad de abandonar el país y si se ajustan a lo dispuesto en el artículo 12 del Pacto. Se ruega formulen también observaciones sobre las denuncias de las restricciones arbitrarias impuestas a la libertad de circulación de los defensores de los derechos humanos, los abogados y los periodistas que tienen prohibido abandonar el país, y sobre la expulsión de Elena Tonkacheva, defensora belarusa de los derechos humanos, presuntamente a causa de sus actividades.

#### **Derecho a la intimidad y a la vida familiar (art. 17)**

26. Sírvanse aclarar si las escuchas telefónicas y otras diligencias indagatorias similares solo pueden ser autorizadas por los tribunales. Se ruega respondan a las inquietudes expresadas por el hecho de que los datos personales no están debidamente protegidos en la legislación ni en la práctica y, a este respecto, proporcionen información sobre la legislación relativa a la protección de datos personales y a las salvaguardias jurídicas en vigor frente a la injerencia arbitraria en la vida privada de las personas, entre otras cosas en relación con la protección de los datos personales, y sobre la aplicación de esta ley en la práctica. Explíquese asimismo si son compatibles con el artículo 17 del Pacto las actividades que figuran a continuación: a) el uso del sistema de vigilancia en Internet (el llamado “SORM”) y la obligación impuesta a los proveedores de servicios de Internet de almacenar y conservar datos sobre la actividad de sus usuarios durante un año (Decreto del Presidente núm. 60 de 1 de febrero de 2010), y b) la obligación impuesta a los proveedores de servicios de Internet de almacenar durante un año toda la información relativa a la actividad de sus abonados en Internet (Decreto del Ministerio de Comunicación e Informatización núm. 6 de 18 de febrero de 2015).

#### **Libertad de conciencia y de religión (arts. 2, 18 y 26)**

27. Respecto de las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 16), sírvanse proporcionar información sobre la situación



del proyecto de ley de objeción de conciencia al servicio militar, que fue presentado a la Cámara de Representantes en noviembre de 2014. Indíquese, entre otras cosas, si algún proyecto de ley o alguna ley ya aprobada hacen extensivo el derecho a objetar al servicio militar por motivos de conciencia a las personas que aducen convicciones no religiosas, si la duración del servicio alternativo equivale a la del servicio militar y, de no ser así, cuáles son las razones que justifican esta diferencia.

28. Se ruega expliquen cómo son compatibles con las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 18 del Pacto las restricciones impuestas al ejercicio de la libertad de religión, como el registro estatal obligatorio de las comunidades religiosas, que requiere trámites complicados, y la autorización estatal necesaria para cualquier ejercicio público de la religión y la represión de cualquier actividad religiosa no registrada. Se ruega comenten las denuncias de hostilidad y hostigamiento sufridos por miembros de grupos religiosos minoritarios, incluida la denegación de permisos para establecer lugares de culto y el allanamiento de sus domicilios particulares.

**Libertad de expresión, reunión pacífica, libertad de asociación y derecho a participar en la vida pública (arts. 19, 21, 22 y 25)**

29. En vista de las anteriores observaciones finales (CCPR/C/79/Add.86, párr. 17), sírvanse responder a las denuncias sistemáticas de restricciones arbitrarias impuestas a la libertad de expresión en la legislación y en la práctica, a saber: a) las restricciones al acceso a información de interés público; b) el control estatal de los medios de comunicación y el hostigamiento y la censura de los medios de comunicación independientes; c) la obligación impuesta a los periodistas de disponer de una acreditación estatal y las sanciones aplicables a los que no están acreditados por las autoridades; d) las restricciones a las formas de expresión en Internet y las reglamentaciones periodísticas extraordinarias de los medios de comunicación en línea; e) la tipificación como delito de las injurias y la difamación, y f) la confección de “listas negras” de artistas y las presiones ejercidas sobre las emisoras de radio para que no transmitan música de estos artistas. Se ruega formulen observaciones sobre las denuncias de presiones, hostigamiento y represión en gran escala sufridos por los activistas de la sociedad civil, los periodistas que trabajan para medios de comunicación independientes y de la oposición y los opositores políticos, incluidos los actos de violencia, los registros domiciliarios y el allanamiento de oficinas, la confiscación de equipos y documentación, la vigilancia policial, las detenciones arbitrarias y la imputación de infracciones administrativas sobre la base de conjeturas o de delitos penales con una presunta motivación política, así como las campañas de desprestigio en los medios de comunicación dirigidos por el Estado durante las elecciones presidenciales y parlamentarias o después de estas, entre otras ocasiones.

30. En relación con las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 18), sírvanse explicar si son compatibles con las obligaciones del Estado parte en virtud del Pacto las restricciones al ejercicio de la libertad de reunión pacífica, como las que se establecen en la Ley de Actos Multitudinarios, incluidas las que figuran a continuación: a) la autorización previa para la celebración de reuniones y la denegación sistemática de dicha autorización; b) los requisitos que se estiman excesivos impuestos a los organizadores de reuniones en relación con el mantenimiento del orden público y la seguridad y con la prestación de servicios médicos y de limpieza; c) la restricción de las reuniones a determinados lugares autorizados y la limitación de tamaño de las reuniones organizadas por personas físicas, y d) la prohibición de las reuniones de sensibilización acerca de cuestiones relacionadas con los derechos humanos o la participación en el proceso electoral, y la prohibición absoluta de las reuniones pacíficas espontáneas, las reuniones simultáneas y las contramanifestaciones.

31. Se ruega formulen observaciones sobre las denuncias sistemáticas de violaciones de la libertad de reunión en la práctica, incluidas las medidas de represión empleadas por las fuerzas del orden, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones y reclusiones arbitrarias y la imposición de multas elevadas, detenciones administrativas o penas de cárcel a periodistas y militantes de la oposición y activistas de los derechos humanos por ejercer su derecho a la reunión pacífica en las circunstancias siguientes:

a) En vísperas del campeonato mundial de hockey sobre hielo de mayo de 2014, cuando docenas de activistas de los derechos humanos que pedían que se boicoteara el torneo fueron presuntamente detenidos de manera arbitraria y preventiva con acusaciones falsas, y sometidos a detención administrativa;

b) Durante las “protestas silenciosas” contra el Gobierno que comenzaron el 3 de julio de 2011, en cuya ocasión la policía parece haber hecho un uso excesivo de la fuerza y detuvo y recluyó de forma arbitraria a un gran número de manifestantes pacíficos;

c) Durante la represión de la manifestación de la Plaza de la Independencia en la tarde del día de las elecciones (19 de diciembre de 2010) y en días posteriores, en la que se registraron actos de violencia policial, detenciones masivas, reclusiones y sanciones administrativas y condenas penales contra candidatos de la oposición a la presidencia, militantes de la oposición y periodistas.

32. En referencia a las anteriores observaciones finales del Comité (CCPR/C/79/Add.86, párr. 19), sírvanse facilitar información sobre las disposiciones que se hayan adoptado para garantizar, de hecho y de derecho, el libre ejercicio de la libertad de asociación; faciliten en particular información sobre las medidas para poner remedio a: a) las restrictivas normas para el registro de asociaciones civiles y los informes de la denegación generalizada de la inscripción en el registro por motivos políticos o discriminatorios, como en el caso de las organizaciones de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y el Centro de Derechos Humanos “Viasna”; b) la tipificación como delito de la participación en las actividades de asociaciones no registradas; c) las restricciones impuestas a la financiación de origen extranjero, como la aprobación estatal de esta financiación y la tipificación como delito de cualquier financiación extranjera no autorizada, y d) el hostigamiento y la intimidación de las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro cuyas actividades se consideren contrarias a las políticas y prácticas del Estado. Se ruega asimismo que faciliten información sobre las medidas que se hayan adoptado para garantizar la libertad de inscripción en el registro y el libre funcionamiento de los sindicatos, y formulen observaciones sobre las noticias de injerencias en las actividades de los sindicatos independientes, especialmente en el amplio sector estatal, y de intimidación de dirigentes y miembros de los sindicatos, incluidas las denuncias de palizas, detenciones y reclusiones.

33. Sírvanse comentar las denuncias de presiones, persecuciones, intimidaciones, hostigamiento y reclusión de electores y candidatos políticos de la oposición, entre otras ocasiones en las elecciones de 2010, cuando se impusieron penas de cárcel a cinco candidatos de la oposición. Se ruega expliquen si son compatibles con las obligaciones del Estado parte en virtud de los artículos 19 y 25 del Pacto las actividades que se indican a continuación: a) las denuncias de limitaciones del acceso de los candidatos de la oposición a los medios de comunicación; b) la tipificación como delito de la petición de boicotear las elecciones, y c) las sanciones administrativas en que se puede incurrir por realizar sondeos de opinión sin la acreditación correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Belarús.